

La condena urbana: Nuevas amenazas, viejos temores

El 11 de setiembre del 2001 señaló un punto de inflexión en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Nuestra realidad es que ya no podemos dar por sentado que estamos a salvo del peligro, especialmente si vivimos en una ciudad. La pobreza, el subdesarrollo y la anarquía y fragilidad de los estados, imputable a la política, han creado condiciones favorables para el surgimiento de nuevas y viejas amenazas a nuestra seguridad diaria.

Las ciudades del mundo –y las personas que las habitan– se han transformado en pararrayos para el terrorismo internacional, el crimen transnacional y el desorden cada vez más violento. Aguzada por el miedo y la experiencia, la vulnerabilidad nos ha forzado a cambiar nuestro modo de pensar y vivir.

El terrorismo inflige un daño financiero, físico y psicológico devastador a las ciudades. La ciudad de Nueva York tuvo una pérdida calculada en 110 000 millones de dólares en infraestructura, edificios, puestos de trabajo y otros bienes en consecuencia de los ataques al World Trade Center. Los daños secundarios se distribuyeron ampliamente. El producto interno bruto (PIB) mundial cayó un 8,8% y unos 10 millones de personas pasaron a engrosar las filas de los pobres del mundo.

- Los residentes de las ciudades también se convirtieron en rehenes del crimen, a menudo, de naturaleza violenta.
- Se calcula que un 60% de las personas que viven en ciudades de Norteamérica y Europa y un 70% de los residentes urbanos de América Latina y África ha sido víctimas de un crimen durante los últimos cinco años.
- Entre el 25 y el 30% de los crímenes urbanos implican violencia. Las mujeres, especialmente las de los países en vías de desarrollo, tienen el doble de probabilidades de sufrir una agresión que los hombres.

Cada vez más pruebas sugieren que el crimen y la violencia nacen de la negligencia más que de la condición de pobreza. La criminalidad florece en las ciudades en que hay una marcada discrepancia entre ricos y pobres y donde los sistemas policiales, judiciales y de la sociedad civil se han desmoronado bajo sistemas de gobierno débiles y corruptos. Los paisajes urbanos, más que las zonas rurales, ponen al desnudo las desigualdades entre los privilegiados y los desposeídos. Las tasas de homicidio, un indicador de crímenes violentos, son altas en las ciudades de América Latina y África.

Los habitantes urbanos pobres son los que más sufren esta nueva onda de desorden. El dinero que se está usando para proteger las ciudades contra el terrorismo, está siendo desviado de los programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes pobres de las ciudades. Las secuelas del crimen también los afectan gravemente. Los habitantes de los asentamientos precarios no tienen redes de seguridad, tales como seguros o ahorros, para reponer los bienes robados. Los habitantes pobres de Johannesburgo, Nairobi y otras ciudades, en una encuesta de UN-HABITAT, citaron la falta de seguridad como un tema tan preocupante como el hambre, la falta de empleo y beber agua de una fuente contaminada.

UN-HABITAT considera que tres factores socioeconómicos contribuyen en gran medida al crimen, el desorden y el malestar social.

- La estagnación económica
- La gran proporción de jóvenes en el perfil demográfico.
- Brotes repentinos de crecimiento de la población debido a la migración.

Durante la última década del siglo pasado, los países con tasas de crecimiento de más del 4% anual tenían el doble de probabilidades de que hubiera conflictos civiles que las ciudades en que el crecimiento era más lento. Los jóvenes que no consiguen satisfacer sus expectativas como resultado del mal desempeño de las economías nacionales a menudo expresan su frustración a través de comportamientos descontrolados. Esto se exagera cuando las ciudades no consiguen atraer más inversión. El crimen priva a las ciudades de su competitividad de punta en el mercado global. Es poco probable que haya empresas dispuestas a invertir en ciudades en las que sus activos corran un alto riesgo de ser robados o destruidos.

Hay un vínculo claro entre el desempleo entre los jóvenes y la tasa creciente de delincuencia violenta. Unos 88 millones de jóvenes estaban desempleados en 2003, cifra que corresponde a aproximadamente la mitad de los desempleados del mundo. La fuerza de trabajo joven que no logra integrarse a la economía formal es también una amenaza para la estabilidad política.

Los tres ingredientes que favorecen la violencia confluyen cuando hay movimientos migratorios rumbo a las ciudades de personas que escapan de la pobreza rural o de los conflictos armados. Cuando personas de origen étnico, político o religioso variado se hacían en barrios de bajos ingresos, las animosidades estallan en disturbios civiles e, incluso, como en el caso de Mogadiscio, en una guerra urbana total. Cuando los militantes hindúes destruyeron una mezquita del siglo XVI en la pequeña ciudad india de Ayodhya, los disturbios estallaron a cientos de kilómetros de distancia, en Bombay, Calcuta, Ahmedabad y Nueva Delhi. Casi todos los que murieron vivían en una de esas ciudades.

La inseguridad urbana aumenta la vulnerabilidad y la exclusión social de los habitantes de los asentamientos precarios. Los barrios más pobres son aislados y estigmatizados como refugio de criminales. Encuestas realizadas por UN-HABITAT y sus asociados muestran que los habitantes de los asentamientos precarios sufren una incidencia mucho mayor de ataques criminales que los residentes urbanos de ingresos más altos. En ciudades del mundo desarrollado, fuerzas del orden discriminatorias y leyes draconianas de inmigración para contener la amenaza terrorista también polarizan a las comunidades.

Los altos niveles de inseguridad urbana cambia para peor el cariz de una ciudad. En todo el mundo, los ricos han creado una arquitectura del miedo al retirarse a enclaves residenciales fortificados. Sin embargo, los barrios cerrados se oponen a los principios fundamentales del desarrollo urbano sostenible. Son grandes consumidores de terrenos disponibles y son consumidores que desperdician recursos tales como tierra, agua y electricidad. En la ciudad de Guadalajara, México, los barrios cerrados ocupan el 10% de la tierra para abrigar al 2% de la población. Aún cuando los barrios cerrados se aceptan como opción legítima para quienes disponen de medios económicos, es importante reconocer que plantean nuevos problemas de planificación urbana y agravan los existentes.

Este artículo es un documento de información general de UN-HABITAT; está permitida su reproducción total o parcial siempre y cuando se cite como fuente a: UN-HABITAT. Las fotografías correspondientes se encuentran disponibles en nuestro sitio web. Para solicitar más información, comuníquese con: el Sr. Sharad Shankardass, vocero, o la Sra. Zahra Hassan, enlace con la prensa y los medios de comunicación, Press & Media Relations Unit. Tel.: (254 2) 7623153/7623151. Fax: (254 2) 7624060. Correo electrónico: habitat.press@unhabitat.org, sitio web: www.unhabitat.org. SOWC/06/07/B/Penalty7